



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CONCEJO DE BOGOTÁ 17-02-2020 01:04:39

2020ER4870 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: POLICIA METROPOLITANA/HERNAN ALONSO MENEZES GELVEZ

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/URREGO GARZON FREDDY A

ASUNTO: RESPUESTA A LA PP. 175. DE 2020 POLICIA METROPOLI

OBS: JCSD.

No. S-2020- 055929 / MEBOG-ASJUR-1.10

16 FEB 2020

Doctor
FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN
Sub Secretario de Despacho Comisión Segunda Permanente de Gobierno
Concejo de Bogotá
Calle 36 No. 28ª-41
Bogotá

Asunto: respuesta para proposición No. 175 de 2020.
Radicado Concejo de Bogotá, D. C. No. 2020EE1279
Radicados MEBOG: E-2020- 011686
Honorables Concejales: LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, MARTIN RIVERA ALZATE Y
EDWARD ARIAS.

En forma respetuosa se remite a Usted respuesta a las preguntas Nos. 8 y 9 de la proposición No. 175 de acuerdo al traslado corrido a la Policía Metropolitana de Bogotá por parte del Doctor HUGO ACERO VELÁSQUEZ, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.

Pregunta No. 8

¿Es necesario que esté en riesgo la vida de la fuerza policial para autorizar el ingreso del ESMAD- Escuadrón Móvil Antidisturbios?

R/.

Sea lo primero indicar que la Policía Nacional ha sido concebida constitucionalmente como la institución del Estado que por encima de cualquier consideración y en primer lugar, debe propender por la salvaguardia de la seguridad, tranquilidad y convivencia pacífica de los ciudadanos para que tengan garantía plena para el ejercicio de sus derechos y libertades acorde con los fines del Estado. Esa es la misión constitucional de la Policía contenida en el artículo 218 de la Constitución Política.

Acorde con el mandato constitucional y el ordenamiento jurídico colombiano, la intervención de la Policía Nacional a través del grupo especializado ESMAD sólo se ejecuta en aquellas circunstancias en las cuales se producen efectivamente graves e inminentes afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana que ponen en peligro la vida, integridad personal y bienes de los ciudadanos y los de carácter público, así como

cuando la vida e integridad de los propios miembros de la Policía se encuentran en inminente peligro.

De cara a graves afectaciones en contra de los ciudadanos y de los funcionarios de la Policía, corresponde a la Policía Nacional alinear sus procedimientos con los estándares internacionales en derechos humanos, uso proporcionado y diferenciado de la fuerza¹, para la atención integral de los motivos² de policía y dentro de esta atención integral se enmarca la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, cuando han sido rebasadas las capacidades humanas y logísticas de las unidades básicas policiales.

Aterrizando el tema en lo que se pregunta, se precisa que efectivamente la intervención del ESMAD es la última ratio, la última forma de intervención de la Policía Nacional y sólo se produce cuando se denota escalamiento de los motivos de policía por la violencia, vandalismo, caos que desestabiliza la seguridad, convivencia pacífica y tranquilidad ciudadanas e implica alto riesgo para la vida e integridad de ciudadanos y policiales.

Así lo contempla la Resolución 02903 de 2017 “Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elemento y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional” que contempla el soporte legal internacional y nacional, sobre el respeto por los DDHH y el empleo de la Fuerza, así como el uso diferenciado y proporcionado de la misma como se muestra en el siguiente gráfico:



Pregunta No. 9

¿Existe algún plan o estrategia para identificar a los vándalos que se infiltran en las marchas de la ciudadanía? ¿De qué manera se tiene planeado que la judicialización a los vándalos sea efectiva?

¹ Ley 1801 de 2016 y Ley 2000 de 2019. Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Artículo 22 Titular del uso de la fuerza policial y Artículo 166. Es el medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico, para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley. (...), Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”

² Sentencia Honorable Corte Constitucional C-110/00 (...) “se denomina motivo de policía, aquellos hechos o circunstancias que en cualquier forma atacan contra el orden público, bien sea en forma directa o como resultado del abuso en el ejercicio del correspondiente derecho o libertad. (...)”

R/.

La Policía considera que la mejor estrategia para identificar los vándalos infiltrados en las marchas, es la colaboración ciudadana para identificarlos y si es del caso, hacer uso de las herramientas jurídicas procesales penales como la captura en flagrancia consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política que autoriza a cualquier ciudadano para aprehender al delincuente sorprendido en situación de flagrante comisión de delitos, procedimiento autorizado en el artículo 302 de la ley 906 de 2004; si lo anterior no es posible, la identificación por parte de la ciudadanía de los vándalos y la consecuente denuncia son las mejores herramientas para combatir la infiltración de ese grupo de perturbadores de las marchas pacíficas.

En segundo lugar, se considera vital que los organizadores de las marchas se comprometan a realizar el control de los marchantes para evitar que las movilizaciones pacíficas sean infiltradas por agentes violentos con pretensiones de vandalismo.

Los dos puntos anteriormente indicados constituyen el ideal, el deber ser de las acciones propias de una movilización pacífica para el pleno ejercicio del derecho a la movilización y la protesta social. Se afirma lo anterior porque si se cuenta con el apoyo ciudadano y el compromiso de los organizadores de las marchas, la intervención policial a través de mecanismos de fuerza, no sería necesaria.

En tercer lugar, es vital la colaboración armónica con entes de control y de investigación (Procuraduría, Personería, Fiscalía) para el despliegue de acciones conjuntas que permitan realizar procedimientos investigativos y judicializaciones ajustadas a derecho.

En cuarto lugar, está la actividad que despliega la Policía por medio de funcionarios de inteligencia.

La inteligencia policial es una herramienta fundamental para la seguridad del Estado y la garantía de la Institucionalidad como así lo consagra la ley Estatutaria No. 1621 de 17/04/2013 "Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones" cuyo objetivo es fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia ejercer sus funciones además de establece los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los principios que las rigen, los mecanismos de control y supervisión, la regulación de las bases de datos, la protección de los agentes, la coordinación y cooperación entre los organismos, y los deberes de colaboración de las entidades públicas y privadas.

El artículo 2º de la citada ley define lo que se entiende por la función de inteligencia y contrainteligencia indicando que "es aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta Ley.

El artículo 3º por su parte precisa que la Policía Nacional, como integrante de la Fuerza Pública, está facultada para adelantar labores de inteligencia y contrainteligencia con el fin de individualizar y/o identificar a las personas que durante las movilizaciones ejecuten actos vandálicos con la finalidad de rendir los informes correspondientes a las unidades de policía judicial encargadas de la judicialización de los causantes de actos violentos.

Los elementos materiales de prueba (videos, informes de la ciudadanía, informes policiales), las evidencias recogidas junto con la información acopiada, son los soportes claves para lograr la judicialización efectiva de los vándalos por lo que la Policía cuida los detalles de la cadena de custodia para hacer el aporte correspondiente a la Fiscalía encargada de adelantar las indagaciones correspondientes.

En los anteriores términos se deja contestado el requerimiento hecho a la Policía Metropolitana de esta ciudad y si queda alguna duda o se requiere información adicional favor solicitarla al correo mebog.coman.-asjur@policia.gov.co.

Atentamente,



Coronel **HERNÁN ALONSO MENESES GELVES**
Jefe Oficina Jurídica Policía Metropolitana de Bogotá

Anexos: copia oficio respuesta a DR HUGO ACERO VELÁSQUEZ.

Elaboró: abog. Flor Castelblanco I.
Revisó por: CR. Hernán Meneses
Fecha de elaboración: 15/02/2020
Ubicación: escritorio/ documentos 2020

Avenida Caracas No. 6 – 05, 3º piso
Teléfono: 2809923
mebog.coman-asjur@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

